

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**PROYECTO DE LEY**

**TRÁMITE DE APROBACIÓN LEGISLATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE  
OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO,  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE  
CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)**

**VARIOS DIPUTADOS**

**EXPEDIENTE N°**



## PROYECTO DE ACUERDO

### TRÁMITE DE APROBACIÓN LEGISLATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)

Expediente Nº \_\_\_\_\_

#### ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El artículo 140 inciso 19 de la Constitución Política establece que son “ [...] *deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno [...]*”:

“19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, **a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa** cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la **explotación de servicios públicos, recursos o riquezas** naturales del Estado. [párrafo aparte] La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros convenios



*similares, a que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se registrarán por sus normas especiales” [subrayado para enfatizar].*

Para nuestro sistema jurídico los puertos nacionales son considerados como “bienes propios de la Nación” y los servicios que en ellos se prestan son catalogados por la ley como servicios públicos.

En efecto, el artículo 121 inciso 14 de la Constitución establece que “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: [párrafo aparte] 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los **bienes propios de la Nación.** [...] Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos naciones -éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado” (subrayado para enfatizar).

De la misma forma, la **LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**, N° 7593 de 9 de agosto de 1996, en su artículo 5 indica:

*En los **servicios públicos definidos en este Artículo,** la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad*



*y prestación óptima, según el Artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: [párrafo aparte] g) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales [...] (subrayado para enfatizar).*

Por partida doble, ser catalogados como bienes nacionales y ser considerados como servicios públicos los servicios que brindan, las contrataciones que efectúe el Poder Ejecutivo sobre puertos nacionales se encuentran afectas a la aprobación legislativa que preceptivamente establece el artículo 140 inciso 19 de la Constitución Política; tal es el caso del **“CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)”**.

Por otra parte, para que no quepa la menor duda acerca del cuál es el órgano competente para aprobar o improbar el contrato indicado, la LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, No. 7762 de 14 abril de 1998, en su artículo 64 inciso 1b), excluye la competencia de refrendo de la Contraloría General de la República, en lo que debe entenderse como una clara intencionalidad del legislador de reservarse dicha competencia en tratándose de esta clase de contrataciones.

Los diputados firmantes, previa revisión del contrato indicado, encontramos que el mismo ha sido presentado para la aprobación ante la Contraloría General de la República, siendo que dicha tarea está reservada por



la Constitución Política para la Asamblea Legislativa; así las cosas nos permitimos presentarlo para efectos del cumplimiento del requisito constitucional omitido, no obstante, **dejamos constancia de que la firma estampada no compromete nuestro criterio final respecto a si debe o no aprobarse el contrato de concesión antes indicado.**



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

**TRÁMITE DE APROBACIÓN LEGISLATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  
DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO PARA EL DISEÑO,  
FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 140 inciso 19 de la Constitución Política, en los términos de la certificación oficial, se aprueba **“CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM)”** firmado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto de 2011.

Rige a partir de la publicación.

Juan Carlos Mendoza García



